

RESOLUCION N. 01346

“POR LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN NO. 01802 DEL 30 DE JUNIO DE 2021 Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales establecidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009 modificado por el Decreto Distrital 175 del 04 de mayo de 2009 y en especial, las delegadas por la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021, modificada por la Resolución 046 del 13 de enero de 2022, y la Resolución 0689 del 03 de mayo de 2023 de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que, la Subdirección de Calidad de Aire, Auditiva y visual, perteneciente a la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, en ejercicio de sus funciones de control, seguimiento y vigilancia, realizó visita técnica el 29 de abril de 2020, al establecimiento de comercio denominado **JM INDUSTRIA DE CAUCHO**, ubicado en la Calle 26 Sur No. 7 B – 19 del barrio 20 de Julio, de la localidad de San Cristóbal de esta ciudad, propiedad del señor **JUAN NELSON MOJICA PEÑUELA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.19.061.016, con el fin de verificar el cumplimiento normativo ambiental en materia de emisiones atmosféricas del precitado establecimiento, y con base en la cual se emitió el **Concepto Técnico No. 10775 del 18 de diciembre de 2020**.

Que, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante **Resolución No. 01802 del 30 de junio de 2021**, impuso medida preventiva de amonestación escrita al señor **JUAN NELSON MOJICA PEÑUELA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.19.061.016, propietario del establecimiento de comercio **JM INDUSTRIA DE CAUCHO**, ubicado en la Calle 26 Sur No. 7 B – 19 del barrio 20 de Julio, de la localidad de San Cristóbal de esta ciudad, y dispuso requerirle en los siguientes términos:

“ARTÍCULO PRIMERO. - Imponer medida preventiva consistente en Amonestación Escrita al Señor JUAN NELSON MOJICA PEÑUELA identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.061.016 y registrado bajo la matrícula mercantil No. 1246959 del 17/02/2003 , en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado: JM INDUSTRIA DE CAUCHO, ubicado en la Calle 26 Sur No. 7 B – 19 del barrio 20 de Julio, de la localidad de San Cristóbal de esta ciudad, toda vez que, en desarrollo de su actividad económica de producción de piezas de caucho no da un adecuado manejo de las emisiones generadas en el proceso de vulcanizado incumpliendo lo establecido por el parágrafo primero del artículo 17 de la Resolución 6982 del 2011.

Lo anterior, según lo indicado en el Concepto Técnico No. 10775 del 18 de diciembre de 2020 y de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo

ARTÍCULO SEGUNDO. – REQUERIR al Señor JUAN NELSON MOJICA PEÑUELA identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.061.016, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio JM INDUSTRIA DE CAUCHO, ubicado en la Calle 26 Sur No. 7 B – 19 del barrio 20 de Julio, de la localidad de San Cristóbal de esta ciudad, para que en el término de sesenta (60) días calendario contados a partir del día hábil siguiente de la comunicación del presente acto administrativo, remita soportes del cumplimiento de las 11 obligaciones normativas y técnicas establecidas en el Concepto Técnico No. 10775 del 18 de diciembre de 2020, en los siguientes términos:

1. Instalar dispositivos de control en el para de vulcanizado, con el fin de dar un manejo adecuado a los olores y gases que son generados durante el proceso de vulcanizado de caucho. Es pertinente, que se tenga en cuenta lo estipulado en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas (Capítulo 5 Sistemas de control de emisiones atmosféricas y Capítulo 7. Dispositivos para el Control de Emisiones Molestas) adoptado por la Resolución 2153 del 2 de noviembre de 2010 del MAVDT (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), sobre sistemas de control de emisiones atmosféricas y dispositivos de control de emisiones molestas, para la implementación del sistema de control de olores y gases.

2. Instalar un ducto para la descarga de las emisiones generadas en el proceso de vulcanizado de caucho, de manera que garantice la adecuada dispersión de las emisiones generadas sin afectar a los vecinos y transeúntes. 3. Presentar a la Secretaría Distrital de Ambiente un informe detallado con su respectivo registro fotográfico, en donde se demuestre que dio cumplimiento a lo señalado en el presente acto administrativo. Una vez se allegue el respectivo informe, esta Subdirección analizará la información” (...)

Que el referido acto administrativo fue comunicado con envió de la comunicación mediante radicado No. 2021EE148257 del 21 de julio 2021, con guía de la empresa 472 No. RA325497641CO con estado devuelto, por lo que se procedió a realizar la publicación de la comunicación del acto administrativo referenciado en la página electrónica y en un lugar visible de la Entidad, con fecha de publicación de la comunicación el 09 de agosto de 2021 y fecha de la comunicación el 13 de agosto de 2021.

Que posteriormente, la Subdirección de Calidad de Aire, Auditiva y visual, perteneciente a la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la **Resolución No. 01802 del 30 de junio de 2021**, realizó visita técnica el día 12 de enero de 2023, al establecimiento de comercio

denominado **JM INDUSTRIA DE CAUCHO**, ubicado en la Calle 26 Sur No. 7 B – 19 del barrio 20 de Julio, de la localidad de San Cristóbal de esta ciudad, de propiedad del señor **JUAN NELSON MOJICA PEÑUELA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.19.061.016, con base en la cual se emitió el **Concepto Técnico No. 05312 del 17 de mayo de 2023**, el cual concluyó:

“(…) 12. CONCEPTO TÉCNICO

Las acciones solicitadas mediante la Resolución No. 01802 del 30 de junio de 2021 (2021EE131160) “Por la cual se impone una medida preventiva de amonestación escrita y se adoptan otras determinaciones” no son exigibles, por cuanto que el establecimiento JM INDUSTRIA DE CAUCHO propiedad del señor JUAN NELSON MOJICA PEÑUELA el cual se encuentra ubicado en el predio identificado con la nomenclatura urbana Calle 26 Sur No. 7 B – 19 del barrio Veinte de Julio, de la localidad de San Cristóbal, y que es objeto de seguimiento y control ya no se encuentra en operación y actualmente en el predio no se desarrolla ningún tipo de actividad económica, tal como se evidenció en el presente Página 8 de 8 126PM04-PR07-M-A8-V5.0 documento técnico, por lo tanto, se sugiere al área jurídica tomar las acciones que correspondan frente al expediente No. SDA-08-2021-1033, y la resolución en mención. (…)”

Que, así las cosas y tal como lo señala la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaría, el establecimiento de comercio denominado **JM INDUSTRIA DE CAUCHO** propiedad del señor **JUAN NELSON MOJICA PEÑUELA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.19.061.016, ya no opera en el predio ubicado en la Calle 26 Sur No. 7 B – 19 del barrio 20 de Julio, de la localidad de San Cristóbal de esta ciudad.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Fundamentos Constitucionales

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia es obligación, a cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso, en virtud del cual, “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que por su parte, el artículo 79 de la Carta Política consagra el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

A su vez, el artículo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, así como su conservación, restauración o sustitución. También ordena que el Estado colombiano deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya lugar y exigir la reparación de los daños causados.

2. Fundamentos Legales

Que en virtud de la Ley 99 de 1993, el Derecho Administrativo Sancionador, se erige como un importante mecanismo de protección del ambiente, en cuanto brinda a los poderes públicos encargados de la gestión ambiental, la obligación de adoptar medidas en procura de dar cumplimiento al mandato constitucional y legal de propender por el interés general, al cual deben someterse las decisiones administrativas dentro de nuestro Estado Social de Derecho.

Que, en ese sentido, si bien el desarrollo de toda actividad comercial particular tiene como propósito fundamental el satisfacer los intereses privados de sus propietarios, el ejercicio de las actividades de esta índole debe observar las normas que para cada caso se establezcan. En esa línea se ha pronunciado la Corte Constitucional mediante sentencia T-254 de 1993, M.P Antonio Barrera Carbonell, a través de la cual señaló que:

(...) “Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinan al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación.” (Negritillas y subrayas fuera del texto original).

Que, de conformidad con lo anterior, toda actividad económica es susceptible de generar contaminación; no obstante, es deber del responsable de aquella, velar por el cumplimiento de las normas ambientales que regulan su actividad o aquellas que le sean exigibles, procurando de esta manera, generar la menor cantidad de impactos ambientales posibles.

Que, en ese sentido, el incumplimiento de esa normativa ambiental conlleva la activación de la potestad sancionatoria del Estado, en los términos de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, norma que regula en Colombia el procedimiento sancionatorio administrativo de carácter ambiental, que estableció:

“(...) Artículo 12. Objeto De Las Medidas Preventivas. Las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana”.

Que, en lo atinente a la ejecutoriedad del acto, la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 91, estableció tácitamente:

*“(...) **ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO.** Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:*

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

5. Cuando pierdan vigencia.

Lo anterior indica que, si el acto administrativo está sometido a una condición resolutoria, una vez cumplida, el mismo perderá su ejecutoriedad, es decir que deja de producir los efectos jurídicos para los cuales existe, debiendo ser declarado por la autoridad que lo expidió, cuyo fenómeno corresponde al decaimiento del acto administrativo.

3. Fundamentos Jurisprudenciales

Que, frente a la aplicación del fenómeno jurídico del decaimiento del acto administrativo por la pérdida de fuerza ejecutoria, el Consejo de Estado en Sentencia del tres (3) de abril de dos mil catorce (2014), con ponencia del Consejero GUILLERMO VARGAS AYALA, precisó su contenido y alcance. Se hará alusión directa a algunos apartes del citado fallo que resultan aplicables al caso que nos ocupa, así:

El alto tribunal al ocuparse de la naturaleza jurídica de la figura señala:

“(...) El DECAIMIENTO del acto administrativo, regulado expresamente en el artículo 66 numeral 2° del C.C.A., (Actualmente por el Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011) es una de las causas por las cuales los actos administrativos pierden su fuerza ejecutoria. Dicho fenómeno opera de manera sobreviniente y por ministerio de la ley, al desaparecer los fundamentos fácticos o jurídicos que dieron lugar a su expedición...”

En cuanto a sus efectos la sentencia expresa:

“(...) Es preciso destacar que el decaimiento, entraña en sí mismo la pérdida de los efectos vinculantes del acto administrativo y determina su inaplicación, pues es propio de dicho fenómeno que al desaparecer los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión administrativa, ésta pierda su fuerza ejecutoria. Dicho de otra manera, con el decaimiento se extinguen las obligaciones de cumplimiento y obediencia que se encuentran implícitas en el acto administrativo y desaparecen al mismo tiempo

tanto la potestad que tiene la administración para forzar su acatamiento como el derecho del administrado de exigir su ejecución”.

Por último, precisa:

“(…) Según el criterio de la Sala, el fenómeno del decaimiento de un acto administrativo se produce ope legis, es decir, por ministerio de la ley. Por lo anterior, no es preciso adelantar ningún trámite para que opere dicho fenómeno, más, sin embargo, nada impide que en sede administrativa la autoridad competente haga una declaración sobre su ocurrencia, sin que tal manifestación constituya en sí misma una nueva manifestación de la voluntad de la Administración, pues se trata simplemente de un acto de simple constatación de un evento sobreviniente cuyos efectos están previamente determinados por el legislador”. (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA

- DEL CASO EN CONCRETO

Que de conformidad con lo establecido en el numeral segundo del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 que a la letra reza “2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.”, esta Autoridad Ambiental, considera necesario declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la **Resolución No. 01802 del 30 de junio de 2021**, por medio de la cual se impuso medida preventiva en contra del señor **JUAN NELSON MOJICA PEÑUELA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.19.061.016, propietario del establecimiento de comercio **JM INDUSTRIA DE CAUCHO**, ubicado en la Calle 26 Sur No. 7 B – 19 del barrio 20 de Julio, de la localidad de San Cristóbal de esta ciudad, consistente en la amonestación escrita, teniendo en cuenta que cesaron las actividades que originaron su imposición.

Que, de acuerdo con la visita técnica llevada a cabo por la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaría técnica el visita técnica el día 12 de enero de 2023, en la Calle 26 Sur No. 7 B – 19 del barrio 20 de Julio, de la localidad de San Cristóbal de esta ciudad, y que dejó como resultado el **Concepto Técnico No. 05312 del 17 de mayo de 2023**, el señor **JUAN NELSON MOJICA PEÑUELA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.19.061.016, en calidad de propietario del establecimiento de comercio **INDUSTRIA DE MECANIZADOS P&P**, ubicado en la Calle 26 Sur No. 7 B – 19 del barrio 20 de Julio, de la localidad de San Cristóbal de esta ciudad, ya no desarrolla su actividad comercial en la citada Dirección.

Que, así las cosas, no hay razón para continuar con la medida preventiva impuesta, al señor **JUAN NELSON MOJICA PEÑUELA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.19.061.016, propietario del establecimiento de comercio **JM INDUSTRIA DE CAUCHO**, ubicado en la Calle 26 Sur No. 7 B – 19 del barrio 20 de Julio, de la localidad de San Cristóbal de esta ciudad, lo que conlleva a que no continúe vigente la medida preventiva.

Que, verificado la pagina oficial **ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES**, el señor **JUAN NELSON MOJICA PEÑUELA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.19.061.016, aparece como afiliado fallecido.



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	19061016
NOMBRES	JUAN NELSON
APELLIDOS	MOJICA PEÑUELA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
AFILIADO FALLECIDO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	01/11/2019	09/02/2023	COTIZANTE

Que de conformidad con lo anterior, y en aras de sanear las actuaciones contenidas en el expediente **SDA-08-2021-1033**, procede el despacho de la Dirección de Control Ambiental, a declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la **Resolución No. 01802 del 30 de junio de 2021**, correspondiente a la imposición de medida preventiva en contra del señor **JUAN NELSON MOJICA PEÑUELA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.19.061.016, consistente en la

Amonestación Escrita, **dado el decaimiento del acto administrativo y su evidente ajuste y aplicación al numeral 2 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011** y por muerte del investigado.

IV. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Que a través del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, se transformó el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente –DAMA–, en la Secretaría Distrital de Ambiente, a la que se le asignó entre otras funciones, la de ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que corresponda a quien infrinja dichas normas.

Que el artículo 5° del Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la función de ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

Que el mismo Artículo en el literal l), asigna a esta Secretaría la función de ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas.

En virtud del numeral 7° del artículo 2° de la Resolución 01865 del 06 de julio de 2021 de la Secretaría Distrital de Ambiente modificada por la Resolución 046 de 2022 y la Resolución 0689 del 03 de mayo de 2023, se delegó a la Dirección de Control Ambiental, entre otras, la función de expedir los actos administrativos que, de oficio o a petición de parte, declaran o niegan, la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos emitidos dentro de los procesos sancionatorios de competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Que, en mérito de lo expuesto, La Dirección de Control Ambiental;

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. – Declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la **Resolución No. 01802 del 30 de junio de 2021**, por la cual se impone medida preventiva de Amonestación Escrita al señor **JUAN NELSON MOJICA PEÑUELA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.19.061.016, propietario del establecimiento de comercio **JM INDUSTRIA DE CAUCHO**, ubicado en la Calle 26 Sur No. 7 B – 19 del barrio 20 de Julio, de la localidad de San Cristóbal de esta ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. – Publicar la presente Resolución en el Boletín que para el efecto disponga la Secretaría. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO TERCERO. - Como consecuencia de la decisión contenida en el artículo primero de la presente resolución y una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el **ARCHIVO** del expediente No. **SDA-08-2021-1033**, para lo cual, se remitirá la presente actuación, al grupo interno de trabajo del área de expedientes de la Secretaría Distrital de Ambiente, con el fin de proceder con lo dispuesto.

ARTÍCULO CUARTO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

Expediente SDA-08-2021-1033

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de julio del año 2023



RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL

Elaboró:

STEFANY ALEJANDRA VENCE MONTERO

CPS:

CONTRATO 2022-1133
DE 2022

FECHA EJECUCIÓN:

27/07/2023

Revisó:

Aprobó:

Firmó:

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

CPS:

FUNCIONARIO

FECHA EJECUCIÓN:

28/07/2023